

▷ Plaza pública

Partidos, sindicatos e Iglesia de Chile se oponen a Pinochet

Miguel Angel Granados Chapa / III

SANTIAGO DE CHILE. — Gabriel Valdez estaba a punto de ser expulsado de Chile, en febrero pasado. La orden había sido dictada. Una filtración oportuna permitió conocer la decisión, tomada por la creciente peligrosidad política de Valdez. Permitió también, invitar a la reflexión a quienes en el gobierno habían resuelto castigar la reunión de 500 dirigentes democristianos con el ex canciller de Eduardo Frei, convertido hoy en el supremo dirigente de esa tendencia política en Chile y también en el único hombre capaz de aglutinar las diversas fuerzas opositoras. La decisión fue enmendada y Valdez se quedó en Chile. Tanto se comprendió la situación que la semana pasada, en un desayuno con periodistas chilenos, en declaraciones *off the record* (que no obstante circularon en Santiago) el propio Pinochet anunció que no expulsaría al antiguo secretario general adjunto de la ONU. "Eso es lo que quieren —aseguró el golpista—, pero no lo haré".

Se refería a Pinochet a los once firmantes —uno de los cuales es Valdez— del Manifiesto Democrático con que la oposición, que no está oficialmente tolerada, respondió al propio general.

El once de marzo, al cumplirse dos años de la promulgación de la Constitución que le dio la mayor suma de poder personal consagrada jamás en documento jurídico alguno, Pinochet ratificó su decisión de permitir la vigencia sólo de una democracia a su gusto. Tres días después, el 14 de marzo, se produjo este acontecimiento central en la historia del seguro retorno a la democracia en Chile. Líderes de un amplio espectro partidario (liberales, radicales, democristianos y socialistas) no sólo expresaron su propia concepción de la democracia, en sentido opuesto a la de Pinochet, sino que evidenciaron el camino que seguirá la recuperación del terreno democrático en Chile, mediante una vasta alianza de partidos. Aunque no firma ningún representante del Partido Comunista, resulta claro para todos que las principales fuerzas viables en este momento en el lejano país austral son las representadas en el Manifiesto.

Es llamativo que líderes de derecha tradicional, como Hugo Zepeda y Julio Subercaseaux, aparezcan al lado de socialistas como Julio Stuardo y Ramón Silva Ulloa, equilibrados por Valdez y Patricio Alwyn, de la democristianía. Entre otras cosas, eso significa que los partidos prohibidos han superado la etapa de las recriminaciones mutuas, en que se acusaban de haber dado pie al golpe de 1973 o de haber sido cómplices de él.

Este Manifiesto no es la primera expresión pública de desacato al régimen. Meses antes surgió el Proden, Proyecto de Desarrollo Nacional, una reunión también variopinta de antiguos y actuales dirigentes. Su posición importa porque representa una suerte de escisión en la derecha gobernante. Proden ha sugerido cambios en la Constitución que involucran el relevo de Pinochet, como parte de un movimiento de transición cívico-militar. Ese proyecto ha sido acogido no sólo por líderes políticos sino también por jefes sindicales. Otros sectores laborales tampoco se recatan para expresar su distancia del gobierno. Armando Letelier, secretario general de la Confederación Nacional de Empleados Electrometalúrgicos y Automotrices, dijo por ejemplo ante el mensaje de Pinochet: "El Presidente dio a entender que las únicas alternativas para el país son este gobierno o el marxismo. Estas apreciaciones no me gustan, por cuanto los trabajadores tienen la democracia como alternativa".

Pero sin duda donde mayormente está consolidada la oposición a Pinochet es en la Iglesia, la Católica y la de otras confesiones cristianas. Si bien desde el momento mismo del golpe, el clero chileno se opuso a los excesos de la dictadura, es claro para todos que cohonestó el cuartelazo. Apenas dos días después de la traición a Allende, el comité permanente del episcopado chileno confió "en el patriotismo y el desinterés que han expresado los que han asumido la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país, tan gravemente alterados", frase esta última que entrañaba una severa censura a la Unidad Popular.

Hay sin embargo una gran distancia entre aquel 13 de septiembre y el 13 de marzo de este año. Ese domingo se leyó en los templos de Santiago una reprimenda del cardenal Raúl Silva Henríquez al gobierno. El cardenal habló de incomprendiones y persecuciones sufridas por la Iglesia. Su vicario, que además se encarga del Vicariato de la Solidaridad que tanto ha trabajado por preservar los derechos humanos en Chile puntualizó las cosas: "un estado de emergencia debe ser de emergencia y no de diez años". Y aunque trató de restar importancia al carácter crítico que en este momento reviste la relación entre el gobierno y la Iglesia, lo ratificó en último término: Este momento, dijo, "no es ni más ni menos difícil. Siempre hemos tenido uno que otro problema. (Las relaciones) están más difíciles en el sentido que antes teníamos más fluidez de conversación, que en este momento prácticamente no tenemos".

La expulsión de tres sacerdotes, acusados de subversión, condujo las cosas al extremo de que los superiores de las órdenes a que pertenecen los sancionados, demandaron la excomunión de las autoridades que vejaron a los clérigos. Acaso a ello, y a otras circunstancias, se deba el cambio de actitud del gobierno ante otros dos sacerdotes, detenidos el 24 de marzo tras la marcha impedida por la policía, y que fueron liberados al día siguiente. Quizá no fue ajena a ese gesto el que uno de estos dos últimos curas, Pablo Fontaine, sea hermano del presidente de la Confederación del Comercio y la Industria, y de quien hasta hace poco tiempo dirigió *El Mercurio*, el diario que tanto contribuyó al golpe y ahora propone una solución aperturista.

1 + 1
6 - Abril
1983